

CAJA PETROLERA DE SALUD

INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL MARCO INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD, RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5 DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 16

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Nº IX/OP52/S20 O1

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA

1.1. Antecedentes

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible efectuada en el mes de septiembre de 2015, los jefes de Estado de los países miembros decidieron adoptar formalmente la *“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”*, la cual proporciona el marco para una acción compartida para *“Las personas, el planeta y la prosperidad”*. Las partes interesadas implementarán una alianza de colaboración, constituyéndose en un plan de acción integrado y estructurado en cuatro (4) partes principales:

- a. La visión y los principios para la transformación de nuestro mundo, tal y como quedaron establecidos en la Declaración de Naciones Unidas.
- b. El marco de resultados para los Objetivos Globales del Desarrollo Sostenible.
- c. Los medios para la implementación y para una alianza global.
- d. El seguimiento y la revisión.

Es así que la *“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”* establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, los que constituyen un plan de acción ambicioso y de largo plazo, para erradicar la pobreza y asegurar el desarrollo sostenible hasta el 2030.

En ese sentido, en la XXVI Asamblea General Ordinaria de la *“Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)”* y XXII Congreso de la *“Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)”*, se establece el papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en el seguimiento sobre implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la ejecución de exámenes. Al respecto, en los Planes Estratégicos de la INTOSAI y la OLACEFS 2017-2022 se establece la necesidad de que cada nación debe esforzarse en el desarrollo sostenible.

Por lo tanto, después de un proceso de adaptación que comenzó en Lima – Perú, el 2017, la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) dio inicio a un curso eLearning, en el contexto de marcos institucionales para combatir la corrupción, misma que contó con la intervención de 12 Entidades Fiscalizadoras Superiores, miembros de la OLACEF.

En este marco, el programa *“Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI)”* sobre Lucha contra la Corrupción se materializa, en consideración del papel que desempeñan las *“Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”* en la implementación del desarrollo sostenible, la promoción de la eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia de la administración pública. De este modo se coadyuva a los gobiernos en la lucha contra la corrupción, contemplada en la meta 5, que pretende *“Reducir sustancialmente la corrupción y soborno en todas sus formas”* de la ODS 16 de la agenda 2030 *“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la Justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”*.

La Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia miembro pleno de la OLACEFS, el 17 de enero de 2019, suscribió con la IDI el *“Acuerdo de cooperación acerca de la Iniciativa EFS en Lucha Contra la Corrupción”*, comprometiendo su participación a trabajar en conjunto para lograr los resultados favorables.

Al respecto, la Contraloría General del Estado para determinar el sector sujeto a examen consideró las prioridades del Estado boliviano, para lo cual se basó en la Constitución Política del Estado, que en su artículo 9, señala como fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el acceso a la salud; asimismo, se consideró criterios establecidos que fueron ponderados entre los que tenemos: Relevancia material, relevancia no material, impacto potencial, interés de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y auditabilidad, cuyo resultado fue en el Sector de Seguridad Social - Corto Plazo.

Por lo tanto, se efectuó la *“Auditoría operacional sobre la eficacia del Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción en el Sector de Seguridad Social - Corto Plazo del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto al objetivo de desarrollo sostenible 16.5”*, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, aplicando los lineamientos y metodología impartida a través del IDI Learnig bajo la dirección de la OLACEFS, cuyo pronunciamiento fue reportado en el informe N° IX/OP51/S20 O1 al Ministerio de Salud, entidad cabeza de Sector Salud, que incluye la Seguridad Social a Corto Plazo.

En la citada auditoría el alcance abarcó a los entes gestores de la seguridad social a corto plazo, del cual forma parte el Caja Petrolera de Salud, por lo tanto, en el presente informe se reporta aspectos relativos al diseño e implantación del control interno y contiene hallazgos de auditoría, en cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental 235.03 inciso f), los cuales, afectaron en el grado de eficacia del Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción en el Sector de Seguridad Social - Corto Plazo, cuyas recomendaciones, generarán, generarán acciones de mejora.

1.2. Objetivo

Determinar si el control interno relacionado con el Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción en la Caja Petrolera de Salud (CPS), ha sido diseñado e implantado para el cumplimiento de la Meta 5 *“Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”*, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 *“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”*, en el periodo comprendido entre enero de 2018 y junio de 2019.

1.3. Objeto

El objeto de la presente auditoría está constituido por los planes, procesos, procedimientos, acciones y los instrumentos de control interno incorporados a ellos, de la CPS, relacionados con el Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) - Meta 16.5 *“Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”*, a través de la identificación de hechos de corrupción, desarrollo e implementación de instrumentos y herramientas de prevención contra la corrupción; así como de un sistema de seguimiento y monitoreo.

1.4. Alcance

La auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Operacional Nrs. 231 a 235, aprobadas con Resolución N° CGE/057/2016, del 6 de julio de 2016, vigentes a partir del 1 de septiembre de 2016; así como las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012, del 27 de agosto de 2012.

La auditoría comprendió la evaluación de los planes, procesos, procedimientos y acciones, y los instrumentos de control interno incorporados a ellos sobre los aspectos administrativos, operacionales y gerenciales de la CPS, relativos al Marco Institucional para la lucha contra la corrupción, relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) - Meta 16.5 *“Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”*, por el período comprendido entre enero de 2018 y junio de 2019.

Cabe aclarar que el pronunciamiento sobre la eficacia del Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción, en el Sector de Seguridad Social - Corto Plazo del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a la Meta 5 “*Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas*” del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) de la agenda 2030 “*Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la Justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles*”, se expone en el informe N° IX/OP51/S20 O1.

1.5. Metodología

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, se efectuó la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo suficiente y competente, a través de:

a) Planificación

Planificamos de tal forma que el objetivo del examen sea alcanzado eficientemente con la aplicación de las siguientes actividades:

- Obtención y comprensión de las disposiciones legales y normas relativas al objeto de la auditoría, vigentes en el periodo examinado.
- Conocimiento y comprensión de los planes, procedimientos, operaciones y/o actividades realizadas por la CPS, referidas al objeto de la auditoría.
- Evaluación del control Interno relacionado con las operaciones y/o actividades inherentes al objeto de la Auditoría, identificación y valoración de los riesgos que podrían afectar su normal desarrollo.
- Elaboración de la Matriz de Planificación de Auditoria producto del Memorándum de Planificación, incluyendo procedimientos de recopilación y análisis de datos, determinando técnicas de auditoría como ser testimonial, documental y analíticas a la medida de las operaciones analizadas.

b) Ejecución

Esta fase consistió en la ejecución de las técnicas y procedimientos de auditoría establecidos en la columna “Procedimientos de análisis” de la Matriz de Planificación de Auditoria, que se constituye en los programas de trabajo, consistente principalmente en revisión documental, aplicación de entrevistas, inspecciones, entre otros.

c) **Comunicación de Resultados**

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emite el presente informe respecto a si el control interno relacionado con el Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción en la CPS, ha sido diseñado e implementado para el cumplimiento de la Meta 5 “*Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas*”, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16; asimismo, se reporta hallazgos de control interno relevantes, en el marco de las Normas de Auditoría Operacional, aprobada con Resolución N° CGE/057/2016, vigente a partir del 1° de septiembre de 2016.

2. RESULTADOS DEL EXAMEN

En el presente informe se reportan aspectos de control interno en la CPS, que afectaron el grado de eficacia del Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción en el Sector de Seguridad Social - Corto Plazo.

2.1 Incipiente capacitación sobre conceptos de fraude y prácticas de corrupción al personal de la Caja Petrolera de Salud

El Departamento Nacional de Recursos Humanos de la Oficina Central de la CPS, para la gestión 2018, programó y ejecutó cursos de capacitación, relacionados a la Ley 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, realizado en la Escuela de Gestión Pública, evento que se llevó a cabo entre el 26 y el 29 de noviembre de 2018, con la participación de 39 funcionarios, como se evidenció en lista de asistencia e informe respectivo del curso, según nota CITE: OFN/DAF/DNRH/EDC-NI-0234/2018, del 5 de diciembre de 2018, emitida por la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la CPS.

En la gestión 2019, observamos que el Plan de Capacitación no incluye temas relacionados con corrupción o fraude, corroborado por el Jefe de Departamento Nacional de Recursos Humanos, según nota N° OFN-DAF-DNRH-EDC-030/2019, del 18 de febrero de 2019.

Al respecto, en reuniones del 2 y 8 de octubre de 2019 con el personal de las siguientes unidades seleccionadas de la Administración Departamental de La Paz, manifiestan que no recibieron capacitación en temas relacionados al fraude y corrupción: Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Licitaciones, División Nacional de Control de Empresas.

Asimismo, en reunión con Daniel Santalla Torrez, Jefe de Departamento Nacional de Recursos Humanos, el 4 de octubre de 2019, este señala que se gestionan cursos para fomentar la lucha contra la corrupción, promoción de los valores en el trabajo y otros que son de interés en la gestión de la Institución, en la medida de recursos y espacios disponibles. En este entendido, la programación de cursos por parte de la Institución, ha sido insuficiente para promover buenas prácticas ante la corrupción y/o fraude que pudiesen ocurrir.

Al respecto, el artículo 40 (Gestión de Riesgos) del Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la CPS, aprobado con R.D. N° 014/2019, señala que:

“La UTLCC promoverá planes, programas y medidas de gestión de riesgos para prevenir posibles hechos o actos de corrupción en la Caja Petrolera de Salud”.

En el numeral 11.1 del Pilar 11 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016- 2020, aprobado mediante Ley N° 786, del 9 de marzo del 2016, señala:

*“Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción, señala que para lograr una gestión pública transparente y una cultura de cero tolerancia a la corrupción, las **instituciones** y empresas **públicas deben contar con personal capacitado para prevenir, denunciar** (...)”.*

La ausencia de capacitación en temas relacionados con corrupción o fraude, según lo manifestado por la Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, mediante Nota Interna CITE: OFN/UNT-NI-0337/2019 del 23 de octubre de 2019, se debe a la falta de coordinación entre la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; además, porque no se cuenta con procedimientos que permitan una eficiente programación de eventos de capacitación.

Lo citado ocasiona que los funcionarios dependientes, no tengan conocimientos sólidos para prever e identificar posibles prácticas de corrupción en el ejercicio de sus funciones, con el consiguiente perjuicio al normal desenvolvimiento de la entidad.

Recomendación

R01. Se recomienda al Director General Ejecutivo de la CPS asegurarse que el Departamento Nacional de Recursos Humanos y la Unidad de Planificación en coordinación con Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, elabore normativa (procedimientos) para la formulación de planes de capacitación, la cual debe considerar acciones de control orientados a la prevención, detección y contención del ser fraude y corrupción.

La citada normativa y/o procedimientos a ser elaborada debe ser revisada, aprobada, difundida y cumplida por las áreas correspondientes.

Comentario de la Entidad

Se acepta

2.2 Ausencia de políticas de administración de riesgos relativas a fraude y corrupción

La CPS no cuenta con norma expresa para la evaluación de riesgos relacionados a la transparencia y lucha contra la corrupción y fraude, que afecten al normal desarrollo a la prestación de servicios de salud a los beneficiarios o afiliados.

No obstante lo señalado, a solicitud de la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, emitió el informe Cite: OFN/UNT-INF-0040/2019 del 31 de julio de 2009, referente a la identificación de áreas vulnerables con riesgo de corrupción en la CPS; donde se identificó a las Unidades de Licitaciones y Afiliaciones como susceptibles a fraude o corrupción; sin embargo, ésta no constituye una evaluación integral, toda vez que arribó a este resultado considerando la frecuencia de denuncias recibidas, tal como se expone en el reporte de denuncias adjunto al Informe CITE: OFN/UNT-INF-0049/2019, del 6 de septiembre de 2019, emitido por Ingrid Fátima Salvador Molina, Responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, identificándose 19 de los 44 casos denunciados que tienen incidencia en los procesos de contratación a nivel nacional, por el período objeto de la auditoría, cuyos procesos fueron concluidos.

Consiguientemente, no se han evidenciado acciones efectuadas orientadas a la evaluación de riesgos, respecto a transparencia, lucha contra la corrupción y fraude.

La norma general de evaluación de riesgos 2211 *“Identificación del riesgo”*, de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobada con Resolución N° CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, establece:

“Se deben identificar los riesgos relevantes, actuales y potenciales, de origen interno y externo, que afecten la consecución de los objetivos institucionales, por medio de un proceso permanente que debe ser parte integrante de la estrategia y planeamiento organizacionales”.

Lo señalado según reunión sostenida con Ingrid Salvador Molina, Responsable Nacional de la Unidad Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el 9 de octubre de 2019, no se cuenta con planes, programas y medidas para gestionar riesgos de fraude y/o corrupción, debido a que se da prioridad a otras actividades, y efectuado análisis de las causas,

consideramos que se debe a que la entidad no cuenta con normativa interna (procedimientos), para efectuar la identificación, valoración y administración de riesgos.

Lo citado ocasiona que la CPS no haya identificado áreas u operaciones críticas vulnerables a corrupción y fraude, aspecto que impide ejecutar acciones oportunas de la administración de riesgos, que permita tomar decisiones reconducentes a efectos de no afectar la transparencia institucional.

Recomendación

R02. Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud asegurarse que la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión y Planificación, elabore normativa interna (procedimientos) referida a la identificación, valoración y administración de riesgos, relacionados con hechos o prácticas de corrupción y/o fraude, que indique acciones de control que le permita el cumplimiento de lo normado, de manera oportuna, eficiente y objetiva.

La citada normativa y/o procedimientos a ser elaborada debe ser revisada, aprobada, difundida y cumplida por las áreas correspondientes.

Comentario de la Entidad

Se acepta.

2.3 Participación limitada del Control Social

Mediante nota LP-CITE-AJRPLP-022/2019, del 5 de noviembre de 2019, la Asociación de Jubilados Rentistas Petroleros, (Control Social orgánico de la CPS), manifiesta que solo han participado en las rendiciones de cuentas de la CPS sin la intervención en otros eventos, corroborado por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción según numeral 15 de la Nota Interna CITE: OFN/UNT-NI-0337/2019 del 23 de octubre de 2019, referida precedentemente.

Al respecto, el Control Social en la CPS está conformado por 66 representantes a nivel nacional, cuyo detalle se encuentra en la Nota Interna CITE: OFN/UNT-NI-0337/2019 del 23 de octubre de 2019, emitida por Ingrid Fátima Salvador Molina, Responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Por otra parte, su accionar se limita a la participación de una sola persona en la rendición de cuentas de las gestiones 2018 y 2019 (rendición de cuentas inicial), toda vez que no existe evidencia que demuestre una participación efectiva sobre las operaciones y actividades que desarrolla la entidad, a fin de prever prácticas de corrupción o de fraude.

La Ley N° 341 del 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social, establece:

Artículo 15. (Espacios Permanentes)

“Las instancias establecidas en el Artículo 2 de la presente Ley, crearán espacios permanentes de Participación y Control Social, conformados por actores sociales colectivos”.

Artículo 18. (Participación y control social a las instituciones del Órgano Ejecutivo)

“El Órgano Ejecutivo mediante sus Ministerios, entidades públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas públicas, garantizará la Participación y Control Social a través del acceso a la información, la rendición pública de cuentas, las iniciativas legislativas, normativas y las políticas públicas, de acuerdo a su reglamentación”.

Por otra parte, el numeral 9.1.4 *“Inclusión del control social en contrataciones”* de la *“Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”*, aprobada con Decreto Supremo N° 214 del 22 de julio de 2009, señala:

“Se generarán mecanismos legales para permitir la participación de las organizaciones sociales como observadores de los procesos de contratación pública, con opinión consultiva, en las Comisiones de Calificación, a manera de asegurar que dichos procesos resguarden debidamente el interés general de la sociedad”.

Lo señalado se debe a la falta de reglamentación específica acorde a la naturaleza de las operaciones de la entidad, que guíe el accionar del control social. Esta situación impide la participación efectiva del control social en prevención e identificación de hechos de corrupción o fraude.

Recomendación

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud, asegurarse que:

R03. El Responsable de la Unidad de Transparencia de Lucha contra la Corrupción en coordinación con la Unidad de Planificación, elaboren el Reglamento Específico del Control Social, que incluya, entre otros, las instancias sociales que conforman el control social, por ejemplo, pacientes activos, representantes de los asegurados, el desarrollo de mecanismos de participación y control social, capacitación a los integrantes del Control Social en temas, entre otros, relacionados a ética pública, código de ética institucional, transparencia, lucha contra la corrupción y fraude, tendientes a mejorar la gestión de la entidad.

La citada normativa y/o procedimientos a ser elaborada debe ser revisada, aprobada, difundida y cumplida por las áreas correspondientes.

Comentario de la Entidad

Se acepta.

2.4 Inexistencia de evidencia de entrega de información previa a la Rendición de Cuentas

Las rendiciones públicas de cuentas correspondientes a las gestiones 2018 (inicial y final) y 2019 (inicial), efectuadas por la CPS; si bien fueron difundidas no existe evidencia que demuestre la entrega de información institucional previa a las rendiciones de cuenta.

No obstante, de acuerdo a reunión sostenida el 23 de septiembre de 2019 con Ingrid Salvador Molina, Responsable Nacional de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, señala que se procede a brindar la información con antelación mediante un CD; sin embargo, no existe evidencia que demuestre este aspecto.

Al respecto, el “*Manual Metodológico para la Rendición Pública de Cuentas*”, aprobada con Resolución Ministerial N° 116/2018, del 4 de septiembre de 2018, que forma parte del compendio de implementación de Ley N° 974 del 4 de septiembre de 2017, en los siguientes puntos, establece:

6.1 “Actividades que se deben realizar antes del acto de audiencia”

Paso 5: Convocatoria al control social

Acción.- *Aprobado el documento final a presentarse, la MAE de la entidad deberá fijar el día, hora y lugar de realización de la Audiencia considerando 15 días previos para la entrega de la información al Control Social.*

*Por su parte la Unidad de Transparencia deberá convocar a los actores sociales por las siguientes modalidades: - Invitación Directa: Mediante carta escrita individual dirigida a cada una de las organizacionales sociales, pueblos indígena originario campesinos y otros que estén en la base de datos de actores sociales con las que cuenta la entidad, en la que consignará de forma expresa el lugar el día y la hora de la audiencia e imprescindiblemente **dejando constancia de la entrega de la información a ser expuesta el día de la audiencia.** - Invitación Pública: mediante medios alternativos de información como periódicos, boletines, revistas, trípticos, radio, paneles, página web, y otros mecanismos que faciliten el acceso a la población en general, de acuerdo a las características de los interlocutores y recursos institucionales, en la que consignará de forma expresa el lugar el día y la hora de la audiencia e imprescindiblemente dejando constancia de que la información a ser expuesta el día de la audiencia está disponible en la página web de la entidad, o en oficinas de la misma, para que cualquier persona pueda acceder al documento.”*

Por lo señalado, se advierte que las instancias ejecutivas de la CPS, no han establecido niveles de supervisión que exijan el cumplimiento del procedimiento de difusión de las rendiciones de cuentas, conforme el Manual respectivo, consecuentemente, no se tiene certeza si el control social, así como la población en general interesada en los eventos de rendición de cuentas han tenido conocimiento previo de la información a exponerse los eventos, con el objeto de integrarse y participar en la presentación de resultados y recursos ejecutados.

Lo señalado ocasiona que el contenido de la rendición de cuentas no sea objeto de mayor análisis, entendimiento por parte de los participantes, restando de esta forma la transparencia de la información no solo de los recursos utilizados sino de la forma y fines de su utilización.

Recomendación

R04. Se recomienda al Director General Ejecutivo, asegurarse que a través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y Unidad de Sistemas, desarrollen mecanismos de control y supervisión, como ser la elaboración de una norma (procedimientos) que regule las acciones previas durante y posterior a la rendición de cuentas, que a fin de cumplir con el objetivo de esta práctica, consistente en transparentar el uso de los recursos asignados.

Comentario de la Entidad

No se acepta la observación, debido que durante las gestiones 2018 y 2019 se entregó la información relacionada a los temas a tratar durante la rendición de cuentas a los participantes de forma previa, no obstante lo que faltó es la constancia de entrega de dicha información.

A la fecha se cuenta con mecanismos de comprobación sobre la entrega de información previa a las rendiciones de cuenta, adjuntando 3 ejemplares de las invitaciones para actores sociales y participantes, correspondiente a la gestión 2020.

Comentario del Auditor

La aclaración emitida por la entidad no desvirtúa la observación debido a que la recomendación pone énfasis en la implementación de mecanismos de supervisión, aspecto que no fue aclarado. Por lo expuesto, se mantiene la observación.

2.5 Página web institucional desactualizada

La CPS cuenta con una Página Web Institucional, en la que expone información de la entidad; sin embargo, se observa que no tiene, entre otros, la siguiente información:

- Nómina de autoridades
- Nómina de personal dependiente
- Memoria institucional o informe de gestión
- Informes de resultados de viajes al exterior
- Banco de trabajo de investigaciones
- Información estadística
- Flujo de procesos
- Presupuesto institucional (2018 y 2019)
- Ejecución presupuestaria gestión 2019

Esta situación también fue advertida por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Salud, por cuanto producto del seguimiento que realizó, se advirtió la desactualización de la citada página web institucional, como lo señalan las notas MS/UTRANS/CE/446/2018 y MS/UTRANS/CE/420/2018 de 25 de octubre y 13 de noviembre de 2018; respectivamente.

Al respecto, según reunión sostenida el 23 de septiembre de 2019 con Ingrid Salvador Molina, Responsable Nacional de la Unidad de Transparencia de Lucha contra la Corrupción, la falta de actualización de la página web fue advertida por el Ministerio de Salud y la misma fue reportada en el mes de diciembre de 2018, manifestando que la periodicidad para la referida actualización por lo menos debería ser en forma trimestral.

El artículo 10, numeral 6 de la Ley N° 974, del 4 de septiembre de 2017, respecto a las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, establece:

“Asegurar la información pública, exigiendo a las instancias correspondientes en la entidad e institución, la otorgación de información de carácter público, así como la publicación y actualización de la información institucional...”.

El artículo 15 (Página web institucional) del *“Reglamento Tipo de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”*, que se encuentra en el compendio de implementación de Ley N° 974 del 4 de septiembre de 2017, en el párrafo II, señala que la página web institucional deberá contener como mínimo, la siguiente información:

- a) Datos generales del (nombre de la entidad o empresa pública): misión, visión, principios, objetivos institucionales, domicilio, números de teléfono, fax y correo electrónico institucional.
- b) Nómina de autoridades, asesores y personal técnico o administrativo, en todos sus niveles y jerarquías; así como la modalidad de selección y contratación.
- c) Plan Estratégico Institucional, Programa Operativo Anual (POA) programado, ejecutado y resultados de gestión.
- d) Presupuesto institucional, fuentes de financiamiento, escala salarial, estados financieros de gestión.
- e) Datos generales de todos los contratos de bienes, obras y servicios celebrados por la entidad. Detalle de la adquisición de bienes y/o servicios, programados y ejecutados y nómina de proveedores.
- f) Información contable de la gestión fiscal del (nombre de la entidad o empresa pública) y sobre procesos de auditoría interna y externa.
- g) Viajes oficiales y resultados alcanzados.
- h) Marco legal, que contenga la normativa general aplicable al (nombre de la entidad o empresa pública), tratados o convenios internacionales, disposiciones reglamentarias y otras de carácter general.
- i) Cuando corresponda, información sectorial de utilidad para los sectores de la sociedad relacionados con el ámbito de funciones del (nombre de la entidad o empresa pública), tales como estadísticas, cotizaciones, tarifas, indicadores, estudios, entre otros.
- j) Formularios de solicitud de información o para reclamaciones o denuncias.
- k) Comentarios y sugerencias.
- l) Otras requeridas por ley

Por otra parte, el *“Manual técnico de contenidos para la evaluación y seguimiento de Páginas Web institucionales - Acceso a la información”*, aprobado con Resolución

Ministerial N° 156/2018, del 7 de diciembre de 2018, emitido por el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, en los siguientes puntos señala:

- El numeral 2 (Finalidad).- Página web institucional con información completa y actualizada, conforme los parámetros del presente documento.
- El Numeral 8 (Información institucional que debe contener la página web institucional).- El presente manual establece la información mínima que toda entidad pública deberá publicar en su página Web institucional, además de establecer claramente las políticas de actualización de esta información, respondiendo a preguntas de ¿Cuándo?, ¿quién? y ¿para?.
- El numeral 16 (Transparencia institucional y lucha contra la corrupción).- La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción deberá contar con un espacio exclusivo en la Página Web, mediante el cual se publique la información sobre las actividades que responden a la promoción e implementación de Planes, Programas, Proyectos y acciones en transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Así mismo señala:

¿Cuándo?.- Se deberá actualizar cada vez que existan actividades nuevas.

¿Quién?.-La Dirección, Unidad o responsable de UTLLC.

¿Para?.- Que el usuario este actualizado de todas las actividades que se realiza en el marco de la transparencia y lucha contra la corrupción.

El numeral 10.1.3 “Universalización del uso de Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en los sujetos obligados” de la “Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”, aprobado con Decreto Supremo N° 214 del 22 de julio de 2009, señala que “Con el fin de llegar a la sociedad, se instruirá a todos los servidores disponer su información en sus respectivas páginas web institucionales, conforme a estándares uniformes”.

La falta de actualización de la página web institucional se debe a la ausencia de coordinación entre la Unidad de Relaciones Públicas y Unidad Nacional de Tecnologías de Información, debido a que ambas instancias son las encargadas de esta labor, la primera en recabar información y la segunda en exponer o publicar a través de la página web, situación que se ve agravada ante la falta de supervisión o seguimiento por parte de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Esta situación ocasiona que la ciudadanía en general no tenga acceso a la información institucional importante y de carácter público, impidiendo de esta forma la toma de conocimiento sobre el desarrollo de las actividades de las entidades que les permita

formarse un criterio, restando transparencia a la información, con el consiguiente riesgo de tener un ambiente propicio para incurrir en hecho de corrupción o fraude.

Recomendación

R05. Se recomienda al Director General Ejecutivo de la CPS asegurarse que los Jefes de las Unidades de Tecnologías de Información y Relaciones Públicas, en coordinación con la Unidad de Planificación, elaboren normativa interna (procedimiento) respecto al tipo de información y actualización de la página web institucional, considerando aspectos sobre la relevancia de la información, plazos para la actualización y seguimiento, a fin de transparentar el accionar de la entidad.

La citada normativa y/o procedimientos a ser elaborada debe ser revisada, aprobada, difundida y cumplida por las áreas correspondientes.

Comentario de la Entidad

No se acepta la observación, a la fecha los puntos observados fueron actualizados.

Comentario del Auditor

La aclaración efectuada por la entidad no desvirtúa la observación, debido a que aún no se encuentra íntegramente actualizada la información expuesta en la página web, como ser: el Presupuesto Institucional gestiones 2018 y 2019, Ejecución Presupuestaria gestión 2019; así como datos estadísticos (Cantidad de pacientes atendidos, asegurados, consultas, entre otros), memoria institucional o informe de gestión, entre otros que respondan al contenido establecido en el Manual Técnico de Contenidos, para la Evaluación y Seguimiento de Páginas Web Institucionales – Acceso a la información, aprobado con Resolución Ministerial N° 156/2018, del 7 de diciembre de 2018.

No obstante, lo señalado, corresponde aclarar que la recomendación tiene el propósito de mejorar el control interno, toda vez que se enfatiza en la elaboración de procedimientos que permita actualizar y establecer la información a ser publicada en la página web institucional, lo cual será objeto de seguimiento.

Por lo expuesto se ratifica la observación.

2.6 Falta de presentación de la Declaración Jurada de Incompatibilidad

Durante el periodo de examen, en cumplimiento a las circulares Nrs. OFN/DAF/DNRH-CIRC-0025/2018 y OFN/DAF/DNRH-CIRC-0050/2018 del 16 de marzo y 5 de septiembre de 2018, respectivamente; emitidas por la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Caja Petrolera de Salud, solo 200 de los 232 funcionarios de la Oficina Nacional presentaron las Declaraciones Juradas de Incompatibilidad Funcionaria notariada, sin que los mismos hayan sido objeto de análisis o evaluación sobre la veracidad de la información expuesta y sin la definición sobre la periodicidad de la presentación.

Al respecto, el numeral 11.2.2 “*Régimen de inhabilidades y regulación de los conflictos de intereses*”, de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, aprobado con Decreto Supremo N° 214 del 22 de julio de 2009, señala:

“Se combatirá el nepotismo, incorporando medidas que hagan efectivas las prohibiciones de las autoridades de contratar o designar, en la misma institución en la que desempeña sus funciones, a parientes, estableciéndose penas y sanciones específicas por estos actos. Junto con ello, se regularán de manera más rigurosa los conflictos de intereses que puedan tener los servidores públicos, a fin de que sólo atiendan el interés de la sociedad, y no el suyo propio”.

Lo observado, se debe a la ausencia de reglamentación específica que establezca los procedimientos de esta actividad, que garantice el cumplimiento de la implementación de la presentación de las declaraciones juradas de incompatibilidad.

Lo señalado, da lugar a la existencia de riesgo de colusión en desmedro del patrimonio de entidad, y favorecimiento propio o de terceros. Por otra parte, podría ocasionar que existan familiares trabajando en la misma institución, creando un ambiente propicio para el desarrollo de irregularidades y por último, existe el riesgo de encubrimiento de posibles actos o prácticas de corrupción.

Recomendación

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la CPS, asegurarse que:

- R06.** La Unidad de Planificación en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos y Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, elaboren un reglamento específico (normativa interna – procedimientos) para la realización de declaraciones de incompatibilidad, que incluya la periodicidad, responsables de la valoración o verificación de la información presentada, responsables de la custodia entre otros, asimismo, debe incluir acciones a seguir cuando se identifique incompatibilidades

La citada normativa y/o procedimientos a ser elaborada debe ser revisada, aprobada, difundida y cumplida por las áreas correspondientes.

Comentario de la Entidad

Se acepta.

2.7 Insuficiente asignación de recursos a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la CPS a octubre de 2019, se encontraba conformada solo por dos funcionarias (responsable y auxiliar), sin embargo, de acuerdo con el Reglamento de la citada unidad, se establece un equipo de 4 personas: Responsable Nacional de la Unidad; Profesional de Control Social, Rendición Pública de cuentas y acceso a la información; Profesional de prevención, ética, gestión de riesgos y denuncias verbales y escritas y Secretario (a) para el cumplimiento de distintas funciones.

No obstante lo señalado, observamos que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, no se encuentra incluida en la estructura organizacional; asimismo, evidenciamos que sólo ejerce sus funciones en la Oficina Nacional de La Paz, y no tiene presencia en las distintas administraciones Departamentales, Regionales, Zonales y Sub zonales; consiguientemente, no le es posible cubrir y atender requerimientos a nivel nacional.

El numeral 12.1 *“Apoyo a los mecanismos de coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción”* de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción aprobada mediante Decreto Supremo N° 214 de 22 de julio de 2009, Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, señala que: *“Se fortalecerá el funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en cada uno de los organismos del Estado para prevenir y perseguir actos de corrupción mediante la dotación de mayores recursos económicos y humanos”*.

La disposición SEGUNDA de la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de 4 de septiembre de 2017, señala que: *“Las entidades y empresas públicas deberán presupuestar recursos necesarios para el funcionamiento de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, sin que represente costos adicionales al Tesoro General de la Nación”*.

La observación identificada se debe a la existencia de un presupuesto limitado para la contratación de personal capacitado con habilidades y destrezas para prevenir hechos de corrupción, lo que no permite el desarrollo de sus actividades, ocasionando que la Unidad

de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no cumpla con sus funciones en forma eficaz y eficiente, que permita combatir la corrupción en la Caja Petrolera de Salud.

Recomendación

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud asegurarse que:

- R07.** La Unidad Nacional de Gestión y Planificación efectúe un análisis organizacional a efecto de incorporar en la estructura organizacional a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, considerando que la misma debe contar con un nivel de independencia y acceso a la información de la integridad de las dependencias organizacionales.
- R08.** El Departamento Nacional Financiero y Unidad de Recursos Humanos, evalúen las necesidades o requerimientos de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, además de gestionar internamente los recursos necesarios para dar respaldo a las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Comentario de la Entidad

Se acepta.

2.8 Ausencia de mecanismos de desburocratización y simplificación de procedimientos

La CPS no diseñó estrategias y mecanismos que permitan desburocratizar las operaciones y actividades relacionadas con la prestación de servicios administrativos, como ser en las áreas de afiliación, vigencia de derechos, contabilidad, presupuestos, entre otros; sin embargo, tiene previsto realizar una reestructuración y actualización de su normativa interna relacionada con el funcionamiento, organización, diseño de procesos y procedimientos conforme a la naturaleza de la entidad, toda vez que la misma se encuentra obsoleta, por cuanto data de 2005, 2007 y 2013; por consiguiente, no responde a la situación actual en que desarrolla sus actividades.

Por otra parte, corresponde señalar que el factor humano también incide en la desburocratización cuyo desempeño está vinculado al logro de los objetivos, metas, misión y visión de la institución; sin embargo, observamos que la contratación de personal se realiza de forma directa sin considerar convocatorias que garantice la incorporación de profesionales idóneos.

El numeral 12.3 *“Optimizar y fortalecer la función administrativa”* de la Política

Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 214 de 22 de julio de 2009, señala que:

“Se propondrán reformas legales y administrativas específicas, a fin de desburocratizar y simplificar los procedimientos de la administración pública (...) incorporando procedimientos simples, expeditos y transparentes, que no den espacios a prácticas corruptas por parte de los servidores públicos”.

“Además, se fortalecerá la institucionalización de los cargos públicos evitando la intromisión política partidaria, el nepotismo y el tráfico de influencias. Con este fin se establecerán mecanismos de provisión de cargos público que aseguren el acceso y permanencia en el cargo solo en base a razones objetivas basadas en las capacidades y el desempeño. Asimismo, que impiden el acceso de personas que carecen de la calificación necesaria para el cargo específico, para ello, también se fortalecerán los mecanismos de evaluación de los servidores públicos sobre la base de una gestión por resultados”.

Lo señalado se debe a la falta de acciones efectivas por parte de los principales ejecutivos de la CPS, en disponer revisión de la normativa que rige los diferentes procesos de la entidad, considerando el crecimiento vegetativo de los asegurados y la necesidad de incorporación de tecnología en los procesos tanto sustantivo como administrativos, cuya inacción daría lugar a un ambiente propicio para prácticas corruptas, ante la premura u oportunidad de obtener respuestas a solicitudes de información, de agilizar los exámenes complementarios de salud, entre otros.

Recomendación

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la CPS asegurarse que:

R09. La Unidad Nacional de Gestión y Planificación analice la integridad de la normativa con que cuenta la entidad, a efectos de desburocratizar procesos operativos y administrativos, que permitan atender al asegurado con calidad, e incluir aquellos procedimientos necesarios y eficientes que sean ágiles, oportunos; producto del referido análisis, emitir normativa interna.

La citada normativa y/o procedimientos a ser elaborada debe ser revisada, aprobada, difundida y cumplida por las áreas correspondientes.

R010. La Unidad Administrativa y Unidad de Sistemas sistematice los procedimientos, priorizando aquellos que le permitan facilitar el desarrollo normal de las actividades de los funcionarios de la entidad.

Comentario de la Entidad

Se acepta.

2.9 No se efectúa seguimiento y monitoreo de prácticas de corrupción o fraude

La CPS no implementó mecanismos de monitoreo y seguimiento sobre corrupción o hechos de fraude identificados, ni sobre denuncias recibidas, así como el tratamiento que se dará a los mismos.

No obstante de lo señalado, verificamos que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional implementó el “*Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (SITPRECO)*”, para el registro de denuncias y poner en línea a todas las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para transparentar denuncias y generar monitoreo permanente a las Rendiciones de Cuentas, la cual no es considerada como herramienta que permita a la entidad el seguimiento y monitoreo de denuncias registradas.

Al respecto, la Ley N° 974, del 4 de septiembre de 2017, de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en los siguientes artículos señala:

- Artículo 10 (Funciones) en el numeral 9 señala “*Alimentar el portal de transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la información generada en el marco de sus funciones*”.
- Artículo 18 (Sistema de información de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción-SITPRECO), señala:

I. El Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción –SITPRECO, es el sistema de información del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que contiene información sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

V. Las entidades y empresas públicas son responsables de remitir la información para el funcionamiento del SITPRECO.”

Por su parte, el artículo 2 (Objetivo del SITPRECO) del Reglamento del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, aprobado con Resolución Ministerial Nro. 23/2018, del 26 de febrero de 2018, señala “*El SITPRECO tiene por objeto contar con información permanente y actualizada...*”

La Norma N° 2312 “*Enfoque Sistémico de las Actividades de Control*” de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobada con Resolución CGR-1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000, establece que:

Las actividades de control son aplicables, en un enfoque sistémico de las organizaciones, a los insumos, procesos y productos, tanto para los usuarios internos de estos últimos como para los destinatarios o usuarios finales, abarcando también la retroalimentación para el aseguramiento de la calidad.

Este enfoque es esencial para comprender los efectos interrelacionados de desvíos en los insumos, procesos y productos, que terminan afectando la consecución de los objetivos institucionales y a la identificación en cada componente del sistema de las actividades claves.

También el proceso de retroalimentación coadyuva a brindar las entradas al sistema (inputs) requeridos para una supervisión permanente y efectiva.

Lo señalado se debe a la falta de procedimientos para la implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento sobre corrupción o hechos de fraude, acorde a la naturaleza de la entidad, con base en el SITPRECO, situación que da lugar a que no exista información íntegra, ni se efectúe seguimiento oportuno de las denuncias de corrupción y la inacción sobre los hechos de corrupción.

Recomendación

R011. Se recomienda al Director General Ejecutivo de la CPS, asegurarse que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en coordinación con la Unidad de Planificación, elaboren normativa interna (procedimientos), para la implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento sobre corrupción o hechos de fraude con base en el SITPRECO.

La citada normativa y/o procedimientos a ser elaborada debe ser revisada, aprobada, difundida y cumplida por las áreas correspondientes.

Comentario de la Entidad

No se acepta la observación, debido a que no se considera necesario el desarrollo de un sistema propio de monitoreo de prácticas fraudulentas o corruptas, toda vez que el

SITPRECO es el sistema oficial para el efecto, en el cual se actualiza y se hace el seguimiento pertinente de las opciones habilitadas como la rendición de cuentas y denuncias. El ministerio de Justicia y Transparencia es la instancia a cargo de los aspectos que contiene el sistema.

Comentario del Auditor

Sobre lo manifestado por la entidad, corresponde aclarar que el SITPRECO, se constituye en un sistema en el cual se registra información de manera general; sin embargo, es necesario el diseño de mecanismos de supervisión y monitoreo, de acuerdo a la naturaleza y necesidad de la CPS, a fin de adoptar acciones correctivas oportunas.

Por lo expuesto, se mantiene la observación.

3. CONCLUSIÓN

En base a los resultados obtenidos se concluye que el control interno en el Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción en la Caja Petrolera de Salud, no ha sido diseñado e implementado para el cumplimiento de la Meta 5 *“Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”*, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 *“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”*, en el periodo comprendido entre enero de 2018 y junio de 2019.

La implantación de las recomendaciones del presente informe, permitirá mejorar el desempeño de la entidad respecto al Marco Institucional de Lucha contra la Corrupción.

4. RECOMENDACIÓN GENERAL

En el marco de los artículos 36 y 37 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado con Decreto Supremo N° 23215, recomendamos al Directos Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud que:

- En el plazo de diez días hábiles, remita su pronunciamiento por escrito sobre la aceptación de cada una de las recomendaciones, caso contrario sus comentarios sobre aquellas con las que no estuviera de acuerdo.
- Presente un cronograma de implantación, sobre las recomendaciones aceptadas, en el cual establezca plazos, acciones a tomar y los responsables de su cumplimiento, en los diez días después de emitido el pronunciamiento.

IX/OP52/S20 O1

- Imparta instrucciones escritas a las instancias correspondientes para el cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. Cabe aclarar que las instrucciones para el cumplimiento de las recomendaciones, no son suficientes, debiendo asegurarse sobre la implantación de las mismas.

Cabe mencionar que el incumplimiento de las recomendaciones contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 1178 y de acuerdo al artículo 13 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 23318-A, la responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público.

La Paz, 30 de noviembre de 2020

Lic. Ma. Isabel Durán Borda
GERENTE DE AUDITORÍA
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA

Lic. Guery Ramiro Cuentas Aguirre
GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Lic. Sandra Quiroga Solano
SUBCONTRALORA DEL NIVEL CENTRAL
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO